

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



**JUZGADO OCTAVO DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE
BOGOTÁ D.C.**

ACCIÓN DE TUTELA

RADICADO: 11001-41-05-008-2022-00758-00

ACCIONANTE: ELA CECILIA ARCIRIA BELTRÁN

ACCIONADA: ADRIANA MARÍA FAJARDO CARDONA

SENTENCIA

En Bogotá D.C., a los veintiún (21) días del mes de octubre del año dos mil veintidós (2022), procede este Despacho Judicial a resolver la acción de tutela impetrada por **ELA CECILIA ARCIRIA BELTRÁN** quien solicita el amparo de su derecho fundamental de petición, presuntamente vulnerado por **ADRIANA MARÍA FAJARDO CARDONA**.

RESEÑA FÁCTICA

Manifiesta la accionante, que el 05 de septiembre de 2022 presentó un derecho de petición ante la accionada.

Que a la fecha, no ha recibido respuesta alguna.

Por lo anterior, solicita se ampare su derecho fundamental y, en consecuencia, se ordene a la accionada dar respuesta de fondo a su petición.

CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA

ADRIANA MARÍA FAJARDO CARDONA:

La accionada allegó contestación el 12 de octubre de 2022, en la que manifestó que dio una respuesta integral a la petición de la accionante.

Posteriormente, el día 14 de octubre de 2022, allegó un alcance a la contestación, en donde aportó el soporte del envío de la respuesta a la petición, al correo electrónico de la accionante y a través de la aplicación “*WhatsApp*”, el día 13 de octubre de 2022.

Por lo anterior, solicita se declare la carencia actual de objeto por hecho superado.

CONSIDERACIONES

PROBLEMA JURÍDICO:

En concordancia con los hechos que fundamentan la acción de tutela, corresponde al Despacho responder el siguiente problema jurídico: ¿La señora **ADRIANA MARÍA FAJARDO CARDONA** vulneró el derecho fundamental de petición de la señora **ELA CECILIA ARCIRIA BELTRÁN**, al no haberle dado respuesta a su petición del 05 de septiembre de 2022?

MARCO NORMATIVO

Conforme el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un instrumento judicial de carácter constitucional, subsidiario, residual y autónomo, dirigido a facilitar y permitir el control de los actos u omisiones de todas las autoridades públicas y excepcionalmente de los particulares cuando estos vulneren derechos fundamentales.

Esta acción constitucional puede ser interpuesta por cualquier persona, a fin de obtener la pronta y efectiva defensa de los derechos fundamentales cuando ello resulte urgente para evitar un perjuicio irremediable, o cuando no exista otro medio de defensa judicial.

DERECHO DE PETICIÓN

El artículo 23 de la Constitución Política consagra el derecho que tienen todas las personas a presentar peticiones respetuosas por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. En desarrollo del Texto Superior, fue expedida la Ley 1755 de 2015 “*Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo*”, una norma de carácter estatutario, que establece la regulación integral de este derecho fundamental.

En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional se ha referido al derecho de petición, precisando que su contenido esencial comprende: (i) la posibilidad efectiva de elevar, en

términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo; (iii) una respuesta de fondo o contestación material, lo que implica una obligación de la autoridad a que entre en la materia propia de la solicitud, desarrollando de manera completa todos los asuntos planteados y excluyendo fórmulas evasivas o elusivas¹.

Conforme la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el ejercicio del derecho de petición en Colombia está regido por las siguientes reglas y elementos de aplicación²:

“1) El de petición es un derecho fundamental y resulta determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.

2) Mediante el derecho de petición se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos de acceso a la información, la libertad de expresión y la participación política.

*3) La respuesta debe satisfacer cuando menos tres requisitos básicos: (i) debe ser **oportuna**, es decir, debe ser dada dentro de los términos que establezca la ley; (ii) la respuesta debe **resolver de fondo** el asunto solicitado. Además de ello, debe ser **clara, precisa y congruente** con lo solicitado; y (iii) debe **ser puesta en conocimiento** del peticionario.*

4) La respuesta no implica necesariamente la aceptación de lo solicitado, ni se concreta necesariamente en una respuesta escrita.

5) El derecho de petición fue inicialmente dispuesto para las actuaciones ante las autoridades públicas, pero la Constitución de 1991 lo extendió a las organizaciones privadas y en general, a los particulares.

6) Durante la vigencia del Decreto 01 de 1984 el término para resolver las peticiones formuladas fue el señalado por el artículo 6 del Código Contencioso Administrativo, que señalaba un término de quince (15) días para resolver, y en los casos en que no pudiese darse la respuesta en ese lapso, entonces la autoridad pública debía explicar los motivos de la imposibilidad, señalando además el término en el que sería dada la contestación.

7) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. En sentido concurrente, el silencio administrativo es prueba de la violación del derecho de petición.

8) La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea el derecho de petición no la exonera del deber de responder.

9) La presentación de una petición hace surgir en la entidad, la obligación de notificar la respuesta al interesado”.

1 Sentencia T-251 de 2008. Citada en las Sentencias T-487 de 2017 y T-077 de 2018.

2 Sentencias T-296 de 1997, T-150 de 1998, SU-166 de 1999, T-219 de 2001, T-249 de 2001, T-1009 de 2001, T-1160 A de 2001, T-1089 de 2001, SU-975 de 2003, T-455 de 2014.

Así entonces, la efectividad y el respeto por el derecho de petición, se encuentran subordinados a que la autoridad requerida, o el particular según se trate, emitan una respuesta de fondo, clara, congruente, oportuna y con una notificación eficaz.

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el derecho de petición supone un resultado que se manifiesta en la obtención de la pronta resolución de la petición. Sin embargo, se debe aclarar, que el derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea negativa³.

En síntesis, la garantía real del derecho de petición radica en cabeza de la administración o del particular una responsabilidad especial, sujeta a cada uno de los elementos que informan su núcleo esencial. La obligación no cesa con la simple resolución del derecho de petición elevado por un ciudadano, es necesario además que dicha solución remedie sin confusiones el fondo del asunto; que esté dotada de claridad y congruencia entre lo pedido y lo resuelto; e igualmente, que su oportuna respuesta se ponga en conocimiento del solicitante, sin que pueda tenerse como real una contestación falta de constancia y que sólo sea conocida por la persona o entidad de quien se solicita la información.

Es importante señalar, que el artículo 5° del Decreto 491 de 2020, amplió los términos para resolver los derechos de petición, pasando de 15 a 30 días hábiles mientras dure el Estado de Emergencia Sanitaria.

La Corte Constitucional se pronunció sobre la exequibilidad de este artículo a través de la Sentencia C-242 de 2020, declarándolo exequible de forma condicionada, bajo el entendido de que la ampliación de términos para solucionar las peticiones no solo es aplicable a las autoridades públicas, sino que también se hace extensible a los particulares.

Valga señalar, que si bien la Ley 2207 del 17 de mayo de 2022 derogó el artículo 5° del Decreto 491 de 2020, en criterio del Despacho esta última norma debe seguirse aplicando a las peticiones que se hayan radicado durante su vigencia; es decir, que los términos establecidos en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 se reestablecerán, pero únicamente para las peticiones radicadas a partir del 18 de mayo de 2022.

³ Sentencia T-146 de 2012.

CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO

En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional ha precisado que la acción de tutela, en principio, *“pierde su razón de ser cuando durante el trámite del proceso, la situación que genera la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados es superada o finalmente produce el daño que se pretendía evitar con la solicitud de amparo”*⁴. En estos supuestos, la tutela no es un mecanismo judicial adecuado pues ante la ausencia de supuestos fácticos, la decisión que pudiese tomar el juez en el caso concreto para resolver la pretensión se convertiría en ineficaz⁵.

En efecto, si lo que el amparo constitucional busca es ordenar a una autoridad pública o un particular que actúe o deje de hacerlo, y *“previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales”*⁶. En otras palabras, ya no existirían circunstancias reales que materialicen la decisión del juez de tutela.

En ese orden, la Corte Constitucional ha desarrollado la teoría de la carencia actual de objeto como una alternativa para que los pronunciamientos no se tornen inocuos, y ha aclarado que el fenómeno se produce cuando ocurren dos situaciones específicas: (i) el hecho superado y (ii) el daño consumado.

Con relación a la categoría de carencia actual de objeto por hecho superado, el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 lo reglamenta en los siguientes términos: *“Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”*.

La Corte Constitucional ha interpretado la disposición precitada en el sentido de que la carencia actual de objeto por hecho superado tiene lugar cuando desaparece la afectación al derecho fundamental invocado⁷. En efecto, si la acción de tutela es el mecanismo eficaz para la protección de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados, cuando la perturbación que dio origen a la acción desaparece o es superada, el peticionario carece de interés jurídico ya que dejan de existir el sentido y objeto del amparo.

⁴ Sentencia T-970 de 2014.

⁵ Sentencias T-588A de 2014, T-653 de 2013, T-856 de 2012, T-905 de 2011, T-622 de 2010, T-634 de 2009, T-449 de 2008, T-267 de 2008, T-167 de 2008, T-856 de 2007 y T-253 de 2004.

⁶ Sentencia T-168 de 2008.

⁷ Sentencias T-267 de 2008, T-576 de 2008, T-091 de 2009, T-927 de 2013, T-098 de 2016, T-378 de 2016 y T-218 de 2017.

Luego, al desaparecer el hecho que presuntamente amenaza o vulnera los derechos de un ciudadano, carece de sentido que el juez profiera órdenes que no conducen a la protección de los derechos de las personas. Así, cuando el hecho vulnerador desaparece se extingue el objeto actual del pronunciamiento, haciendo inocuo un fallo de fondo⁸.

En síntesis, el hecho superado significa la observancia de las pretensiones del actor a partir de una conducta desplegada por el transgresor. En otras palabras, la omisión o acción reprochada por el accionante, ya fue superada por parte del accionado.

Cuando se presenta ese fenómeno, la obligación del juez de tutela no es la de pronunciarse de fondo, solo cuando estime necesario *“hacer observaciones sobre los hechos que originaron la acción de tutela, con el propósito de resaltar su falta de conformidad constitucional, condenar su ocurrencia y conminar a que se adopten las medidas necesarias para evitar su repetición, so pena de las sanciones pertinentes*⁹. De cualquier modo, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que en la sentencia se demuestre la reparación del derecho antes de la aprobación del fallo, es decir, que se demuestre el hecho superado¹⁰¹¹.

CASO CONCRETO

Partiendo de las consideraciones expuestas y de la documental allegada, observa el Despacho que la señora **ELA CECILIA ARCIRIA BELTRÁN** elevó un derecho de petición a la señora **ADRIANA MARÍA FAJARDO CARDONA**, en el que solicitó lo siguiente:

“HECHOS:

- 1. Inicié labores mediante un contrato de trabajo escrito.*
- 2. Fui contratada por parte de la empresa denominada CLEAN SERVICE SOLUTIONS SAS, para prestar los servicios a la señora ADRIANA MARÍA FAJARDO CARDONA.*
- 3. Inicié labores en casa de la señora ADRIANA MARÍA FAJARDO CARDONA el día 08 de julio de 2021.*
- 4. El salario que estaba devengando desde la iniciación del contrato fue el mínimo legal.*
- 5. El cargo desempeñado era de servicio doméstico interna.*
- 6. Durante el tiempo que duró la relación laboral estuve interna.*
- 7. El día 15 de enero de 2022 renuncié al cargo que venía desempeñando.*
- 8. A la fecha no me han cancelado la liquidación de prestaciones sociales.*
- 9. Se le está enviando este derecho de petición por cuanto el trabajo fue ejecutado en forma personal para la señora ADRIANA MARÍA FAJARDO CARDONA quien es solidariamente responsable por el pago de las acreencias laborales que la empresa CLEAN SERVICE SOLUTIONS SAS adeuda a la ex trabajadora.*

8 Sentencia T-070 de 2018.

9 Sentencia T-890 de 2013.

10 Sentencias SU-225 de 2013, T-856 de 2012, T-035 de 2011, T-1027 de 2010, T-170 de 2009 y T-515 de 2007.

11 Sentencia T-970 de 2014.

PRETENSIONES:

1. *Se dé contestación de fondo a cada uno de los hechos aquí descritos.*
2. *Se me informe la fecha en que se me va a cancelar la liquidación de prestaciones sociales.*¹²

La petición fue enviada por la accionante el día 05 de septiembre de 2022, a través de empresa de mensajería, a la dirección: *KRA 16 No. 127-31, TRR 4, APTO 104, CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA CLARA*, de la ciudad de Bogotá¹³. Así mismo, se evidencia que la petición fue entregada el día 06 de septiembre de 2022 en la recepción del Conjunto Residencial Reserva de Santa Clara.¹⁴

La accionada, **ADRIANA MARÍA FAJARDO CARDONA**, al contestar la acción de tutela manifestó que dio una respuesta integral a la petición de la accionante¹⁵; posteriormente, allegó un alcance, aportando el soporte de envío de fecha 13 de octubre de 2022 y la copia de la respuesta que brindó en los siguientes términos¹⁶:

“1. En relación con el primer hecho, Usted celebró contrato con la empresa CLEAN SERVICE SOLUTIONS SAS para prestar sus servicios.

2. En relación con el segundo hecho, reitero que Usted celebró contrato con la empresa CLEAN SERVICE SOLUTIONS SAS para prestar sus servicios. A su vez mi esposo JUAN CAMILO GARCÍA LÓPEZ suscribió contrato de prestación de servicios generales con la empresa CLEAN SERVICE SOLUTIONS SAS, los cuales fueron prestados por Usted.

3. En relación con el tercer hecho y en virtud de lo anterior, Usted prestó servicios en mi casa desde el 8 de julio de 2021.

4. En relación con el hecho 4 y tal como Usted afirma, el salario que devengó fue el mínimo legal.

5. En relación con los hechos 5 y 6, efectivamente Usted prestó servicios domésticos en mi casa como interna.

6. En relación con el hecho 7, efectivamente el 15 de enero de 2022 Usted presentó renuncia y dejó de prestar sus servicios.

7. En relación con el hecho 8, la empresa CLEAN SERVICE SOLUTIONS SAS me informó que ya le había cancelado la liquidación de prestaciones sociales, por lo cual le pedí a esa empresa los comprobantes, pero aún no me los han remitido.

8. En relación con el hecho 9, en el contrato suscrito por mi esposo JUAN CAMILO GARCÍA LÓPEZ con la empresa CLEAN SERVICE SOLUTIONS SAS, es obligación de esa empresa:

“Cumplir todos los meses con sus responsabilidades salariales, prestacionales y de seguridad social con sus empleados, por lo que es facultad del contratante exigir las constancias de pago a seguridad social a lo cual tendrá acceso previa solicitud que haga

12 Página 04 del archivo pdf “001. AcciónTutela”.

13 Página 05 ibídem.

14 Página 05 ibídem

15 Página 04 del archivo pdf “008. ContestaciónAccionada”

16 Páginas 01 a 06 del archivo pdf “009. AlcanceContestación”

de manera inscrita". En todo caso ya pedí los comprobantes a esa empresa para garantizar que efectivamente se le haya pagado o se le pague su liquidación.

9. En relación con su solicitud de que se le "informe fecha en que se me va a cancelar la liquidación de prestaciones sociales", le reitero que la empresa CLEAN SERVICE SOLUTIONS SAS me informó que ya se los ha pagado, pero les pedí los comprobantes correspondientes para garantizar que ello haya sido así o en caso contrario que esta empresa proceda a pagarlos de manera inmediata."

Con base en lo anterior, el Despacho procede a analizar si la respuesta cumple los requisitos señalados por la jurisprudencia constitucional para considerar satisfecho el derecho de petición.

Frente a la **notificación** de la respuesta, se tiene que ésta fue remitida el día 13 de octubre de 2022, al correo electrónico: elaceciliaalciribeltran@gmail.com¹⁷ el cual fue autorizado por la accionante como canal de notificación en la acción de tutela y el cual fue informado a la accionada a través de mensaje de datos por la aplicación "WhatsApp"¹⁸.

En cuanto a la **oportunidad** de la respuesta, se tiene que, aunque no se generó dentro del término de 15 días hábiles previsto en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1º de la 1755 de 2015 (ya vigente para el momento en que se radicó la petición), fue emitida y notificada durante el transcurso de esta acción de tutela.

Ahora bien, respecto del tercer requisito relativo a resolver de **fondo** y de manera **congruente y completa** lo peticionado, se tiene que la respuesta satisface el derecho de petición por la siguiente razón:

En el primer numeral, la accionante solicitó se diera una respuesta de fondo a cada uno de los hechos de la petición; y la accionada efectivamente dio respuesta a los nueve hechos, manifestando lo que le constaba en cada uno.

Y en el segundo numeral, la accionante solicitó le fuera informada la fecha en que se iba a realizar el pago de la liquidación de sus prestaciones sociales; frente a lo cual, la accionada, le precisó que el contrato, que su cónyuge JUAN CAMILO GARCÍA LÓPEZ suscribió con la sociedad CLEAN SERVICE SOLUTIONS S.A.S., fue el de prestación de servicios generales de servicio doméstico; que, como consecuencia, la sociedad CLEAN SERVICE SOLUTIONS S.A.S. fue quien la contrató y la designó para llevar a cabo la prestación del servicio doméstico y que, por tanto, la sociedad en mención era quien debía realizar el pago de la liquidación de prestaciones sociales, por cuanto ése era su empleador.

17 Página 01 ibídem

18 Páginas 02 a 03 ibídem

Por último, le indicó que, solicitó información a la sociedad CLEAN SERVICE SOLUTIONS S.A.S. respecto del pago de la liquidación de prestaciones sociales, quien en respuesta le manifestó que ya había realizado el pago; no obstante, le reiteró que, en caso de que no haya sido así, era la sociedad CLEAN SERVICE SOLUTIONS S.A.S. quien debía responder.

En este punto es menester recordar, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, que el derecho fundamental de petición se satisface con una respuesta oportuna, concreta, clara y congruente, lo que no equivale a sostener que la misma deba acceder favorablemente a lo solicitado, pues lo que se exige es que su contenido cumpla los requisitos mencionados, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo¹⁹.

Por lo tanto, el hecho de que la respuesta no colme el interés del peticionario no afecta el derecho fundamental de petición, pues su núcleo esencial no se contrae a que se otorgue una respuesta que acoja los pedimentos formulados, sino a que se otorgue una respuesta que resuelva de fondo el asunto solicitado. Si la respuesta no accede a las pretensiones, es un asunto ajeno a la acción de tutela que deberá resolverse a través de los mecanismos ordinarios.

Por lo anterior, considera el Despacho que la respuesta brindada por la señora **ADRIANA MARÍA FAJARDO CARDONA** al derecho de petición presentado por la señora **ELA CECILIA ARCIRIA BELTRÁN**, cumple los requisitos señalados por la jurisprudencia constitucional para tener por satisfecha esa garantía *iusfundamental*, pues atendió de fondo el asunto y además fue debidamente notificada.

En consecuencia, lo que era objeto de vulneración del derecho fundamental de petición fue superado, y, por lo tanto, pierde efecto la presente acción de tutela por lo que deberá declararse el **hecho superado**.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO OCTAVO DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE BOGOTÁ D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley:

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por **HECHO SUPERADO** en la acción de tutela de la señora **ELA CECILIA ARCIRIA BELTRÁN** en contra de la señora **ADRIANA MARÍA FAJARDO CARDONA**, por las razones expuestas en esta providencia.

¹⁹ Sentencia T-077 de 2018, T-487 de 2017, T-455 de 2014, entre otras.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes por el medio más eficaz y expedito, advirtiéndoles que cuentan con el término de tres (3) días hábiles para impugnar esta providencia, contados a partir del día siguiente de su notificación.

Por motivos de salud pública, y en acatamiento de las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura para evitar la propagación del coronavirus COVID-19, la impugnación deberá ser remitida al email: j08lpcbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

TERCERO: En caso que la presente sentencia no sea impugnada, por Secretaría remítase el expediente a la Corte Constitucional para que surta el trámite eventual de revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.


DIANA FERNANDA ERASSO FUERTES
JUEZ